La rebelión de la Pachamama

Gustavo Fernández Colón

Las reformas neoliberales alcanzaron su clímax en Bolivia durante la primera y segunda presidencias de Gonzalo Sánchez de Lozada [1993-1997; 2002-2003], quien mediante la aprobación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 en 1996 y el Decreto Nº 24806 en 1997, confirió a las empresas extranjeras plena libertad para la explotación, comercialización y apropiación del excedente de los hidrocarburos y redujo la participación del Estado a la mera recepción de regalías y tributos.

Uno de los proyectos emblemáticos de esta etapa fue el de la explotación del gas natural de las reservas de Tarija, a cargo del consorcio Pacific LNG, integrado por Repsol YPF, British Gas y Pan American, además de la compañía compradora Sempra. El proyecto contemplaba la construcción de un gasoducto para transportar el combustible desde el territorio boliviano hasta el puerto chileno de Mejillones, desde donde sería exportado a México y Estados Unidos. Los antagonismos históricos entre Chile y Bolivia, así como el hecho de que la mayor parte de la población boliviana cocina con leña por carecer de gas doméstico, desataron una oleada de protestas contra esta iniciativa entre los aymara de la ciudad de El Alto, que pronto se extendió al resto del país. Los días 12 y 13 de octubre de 2003, las fuerzas del orden irrumpieron en El Alto asesinando a decenas de manifestantes, a lo que las organizaciones indígenas y campesinas respondieron con una serie de movilizaciones masivas hasta La Paz, donde la represión gubernamental cobró nuevas víctimas.

Este conflicto social, conocido popularmente como la Guerra del Gas, marcó un hito significativo en la evolución política de la Bolivia contemporánea. Pues junto con la renuncia y la huida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada, adquirieron relevancia dentro de la agenda política del país el cuestionamiento a la Ley de Hidrocarburos, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el protagonismo de las organizaciones indígenas y campesinas y el surgimiento del liderazgo de Evo Morales, quien conquistaría la presidencia de la República dos años después.

Una vez cumplida la renacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, las contradicciones entre los planes estatales de explotación de los recursos naturales y la concepción del desarrollo defendida por las organizaciones indígenas y campesinas no han cesado. En efecto, aunque estas organizaciones en general respaldan las transformaciones políticas impulsadas por el presidente Evo Morales, se han visto forzadas a alzar su voz de protesta, una vez más, para exigir el respeto a su derecho constitucional de ser consultadas al momento de otorgar concesiones mineras e hidrocarburíferas en sus territorios ancestrales.

Así lo han hecho, por ejemplo, al oponerse a los trabajos sísmicos de exploración petrolera de la empresa estadounidense Geokinetics en la Amazonía Sur, los cuales ya han afectado a las tierras y las comunidades de las etnias indígenas Mosetén y Leco-Larecaja, y amenazan con dañar también el hábitat de los Chimán, Quechua-Tacana, Tacana, Ese Ejja, Toromona y Leco-Apolo, lo mismo que a los poblados campesinos de la zona. La apertura de caminos, el vuelo incesante de helicópteros, las estruendosas detonaciones, la devastación de bosques y ríos, la aniquilación de especies vegetales y animales de las que depende su sobrevivencia física y cultural, se llevan a cabo con la autorización del gobierno indigenista y nacionalista que actualmente rige los destinos de Bolivia, pero sin el consentimiento de los habitantes originarios de la selva.

Por estas mismas razones, en mayo de 2009, las comunidades quechuas del sur del país exigieron terminantemente a la corporación minera canadiense Vista Gold que se marchara de sus territorios y desistiera de su interés en la explotación de la mina de oro de Amayapampa. E igualmente demandaron al gobierno nacional la paralización de todas las actividades mineras que se llevan a cabo en las zonas rurales, hasta tanto no se apruebe el Reglamento de Consulta y Participación en Actividades Mineras propuesto por las organizaciones indígenas y campesinas.

Con la finalidad de coordinar sus acciones, en julio de 2009 los dirigentes de los principales movimientos sociales de la mayoría indígena y campesina del pueblo boliviano, sostuvieron un encuentro en La Paz en el que acordaron conformar la “Comisión Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos de Bolivia”. En este encuentro estuvieron presentes el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y sus Suyus, la Confederación Sindical

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CTUSCB), la Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas-"Bartolina Sisa" (CSMIOC-BS), el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B), el Pueblo Afroboliviano y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) –incluyendo en esta última a la Organización Indígena Chiquitana (OICH), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)-.

Todas estas agrupaciones suscribieron un manifiesto con un conjunto de resoluciones, en las cuales se cuestiona radicalmente el modelo económico minero-extractivista que ha prevalecido en Bolivia desde la fundación de la República, se exige respeto a la Pachamama y a los lugares sagrados de los pueblos originarios, y se convoca a un debate para emprender la construcción de un nuevo modelo de desarrollo sustentable, que deje atrás la dependencia nacional de la minería y los hidrocarburos.

Aunque resulta evidente que estas proposiciones se hallan perfectamente alineadas con el principio del Vivir Bien (o *suma qamaña*, en lengua aymara), que sirve de fundamento a la nueva Constitución de Bolivia, y coinciden en lo esencial con los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, recientemente propuesta ante la ONU por el presidente Evo Morales; las demandas de las organizaciones de base al parecer han contrariado a la alta dirigencia del gobierno boliviano.

Teniendo en cuenta que el cuestionamiento ecológico a la política energética oficial proviene de los mismos movimientos sociales que han servido de soporte al liderazgo del presidente Evo Morales, estas tensiones internas pueden tener importantes repercusiones sobre el devenir político de Bolivia. Y no sólo de Bolivia sino también de todo el continente, si se considera la creciente proliferación de conflictos provocados por el choque entre la voluntad de sobrevivencia de las culturas arraigadas en la Madre Tierra y la voracidad autodestructiva del capitalismo global. En otras palabras, cabe esperar que cada vez vaya cobrando mayor intensidad la lucha por el acceso a los recursos naturales expresada, en la esfera de los imaginarios, como el antagonismo irreconciliable entre la ecosofía de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y la ideología desarrollista aún prevaleciente en las burocracias, tanto de derecha como de izquierda, de América Latina.